

Un asunto urgente de salud pública y derechos humanos

por Manuel Carballo

La violencia sexual, presente en muchas sociedades y, sobre todo, en aquellas donde existe inestabilidad social, es un ámbito de la salud pública y los derechos humanos en el que podemos incidir activamente y conseguir resultados palpables con rapidez si unimos nuestros esfuerzos.

Cuando trabajé en Sarajevo como Consejero de Salud Pública para la OMS durante la guerra de Bosnia, atendí a una pequeña parte de las más de 40.000 mujeres y niñas que fueron violadas. Recuerdo la fuerte impresión que me produjo descubrir la gravedad del daño físico y de las secuelas psicológicas que sufrieron y seguían sufriendo. Asimismo, evoco con dolor lo poco que se podía ofrecer a las sobrevivientes, los escasos tratamientos y cuidados derivados de la experiencia que teníamos en ese momento, y la casi nula preparación de las organizaciones humanitarias para afrontar una tragedia de tal magnitud. Por otro lado, tuve ocasión de atender a algunos de los hombres y chicos que también fueron violados. No debemos olvidar que el deseo de humillar e infligir dolor a través de la violencia sexual no siempre (o únicamente) afecta a las mujeres.

Con actuaciones a tiempo, la comunidad internacional puede prevenir en gran medida muchos de los delitos que se cometen en tiempos de guerra, especialmente los de carácter sexual. Bosnia y Ruanda fueron un penoso ejemplo de la falta de iniciativa colectiva y de nuestra escasa disposición a actuar de forma decisiva y diligente. Darfur continúa siéndolo. Sabemos que en otras partes del mundo los actos de violencia sexual son habituales y que, inevitablemente, acarrearán un daño físico y psicológico. Hay que recordar que la violencia sexual no aflora únicamente en conflictos bélicos, en el sureste de Asia se abusó sexualmente de muchas mujeres que sobrevivieron al tsunami. Estamos convencidos de que el caos y la inestabilidad social en todo tipo de desastres humanitarios incitan la aparición de la violencia sexual como patología.

Progresos

Tanto los donantes como el resto de organismos implicados deben reconocer abiertamente la magnitud y la

naturaleza de la violencia sexual en las catástrofes humanitarias, así como garantizar que este reconocimiento se refleja en todas las actuaciones humanitarias y proyectos de desarrollo. Tanto la prevención como el tratamiento eficaz deben ser prioritarios. Hemos de subrayar que normalmente no se distingue entre actuaciones paliativas y actuaciones de desarrollo. Sin embargo, a la hora de diseñar las medidas de respuesta a los conflictos y desastres naturales debe prevalecer el principio de desarrollo y reconstrucción a largo plazo. Por otro lado, no debemos olvidar que la violencia sexual no desaparece con los acuerdos de paz y que en los campos de refugiados no siempre prima la seguridad, como nos gustaría creer. Las violaciones, la explotación y los abusos sexuales prosperan allí donde existe desorganización, inestabilidad y desesperanza. Todo ello no hace más que socavar la capacidad de la sociedad para dejar atrás las calamidades y avanzar hacia la reconstrucción.

El desafío de la comunidad internacional no es sólo la financiación, aunque no es posible progresar sin contar con recursos económicos. El verdadero reto exige más bien fomentar de forma sistemática las medidas preventivas y de tratamiento de los actos de violencia sexual en todos los programas de atención y desarrollo. Los donantes deberían negarse a financiar proyectos que no incluyan programas contra la violencia sexual. Por su parte, las organizaciones humanitarias deberían tomar medidas para incluir actuaciones de prevención y respuesta contra los delitos de violencia sexual antes de iniciar su trabajo de campo.

Para ello, necesitamos una información más detallada sobre las actuaciones médicas y psicosociales que mejores resultados han dado y en qué circunstancias. A pesar de que la labor realizada ha sido

intensa, sigue siendo necesario investigar con mayor profundidad cuál es el mejor modo de actuar para prevenir y tratar las consecuencias nefastas de la violencia sexual. Mientras tanto, debemos sensibilizar a los líderes locales y a sus comunidades, así como trabajar con grupos de hombres, cuerpos militares y otros colectivos para explicar que la violencia sexual puede y debe prevenirse. En concreto, no se deberían desplegar las fuerzas de paz y el personal de las organizaciones humanitarias sin antes concienciarles y formarles en la prevención y el tratamiento de los actos de violencia sexual. Aun siendo decisivos en la lucha contra los abusos sexuales, estos contingentes pueden convertirse fácilmente en parte del problema si no disponen de la preparación necesaria ni se encuentran bajo una correcta supervisión.

No sólo es necesario buscar el mejor método para prevenir y actuar ante las agresiones sexuales en los campos de desplazados: también se debe perfeccionar el sistema de registro de casos, de tal forma que, sin dejar de respetar la confidencialidad y el anonimato de las sobrevivientes, desarrollemos bases de datos que nos permitan cuantificar la magnitud del problema y, de este modo, nos faciliten la movilización de los recursos de apoyo locales e internacionales.

Por último, debemos recordar que nuestro objetivo es preservar la dignidad de las personas y la cohesión social. Aunque las sobrevivientes de la violencia y de los abusos sexuales conforman el grupo de personas más afectado, no hay que olvidar que los agresores también quedan marcados. Todo ello merma gravemente el potencial de reconstrucción y el futuro desarrollo de una sociedad cohesionada. A la par que trabajamos en el ámbito de la atención sanitaria, el agua y la salubridad, los recursos alimenticios y la nutrición, el alojamiento o cualquier otro tipo de iniciativa humanitaria, debemos afrontar la problemática de la violencia sexual de forma sistemática y eficaz.

Manuel Carballo es el Director Ejecutivo del Centro Internacional para la Migración y la Salud (ICMH) www.icmh.ch Correo electrónico: mcarballo@icmh.ch